

Auto No: AI-047
Proceso: Verbal-
Demandante: Carlos Mario Monsalve Mejía y Otros
Demandado: Cooperativa de Transportes de Risaralda Ltda
Radicado: 05001 31 03 014 2022 00364 01
Asunto: Confirma auto apelado.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, Nueve (09) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Concita la atención de la Sala desatar el recurso de apelación formulado por la parte demandante, en contra del auto del dos (02) de diciembre del dos mil veintidós (2022), proferido por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, al interior del trámite del proceso verbal promovido por la Carlos Mario Monsalve Mejía y otros en contra de William de Jesús Gañan Salazar, Cooperativa de Transportes de Risaralda Ltda y Aseguradora HDI Seguros S.A., mediante el cual se rechazó la demanda de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Supuestos fácticos vinculados al presente caso. Como hechos relevantes con miras a desatar la alzada, se tiene que, en providencia del dieciocho (18) de noviembre del 2022, el juez decidió inadmitir la demanda, exigiendo entre otros requisitos, que se prestara caución por la suma de \$140.000.000 (art 590.2 del C.G.P), en razón de las medidas cautelares pretendidas o en su defecto se cumpliera con el requisito de procedibilidad.

2. Del escrito de subsanación: Dentro del término oportuno el apoderado de la parte demandante indicó al Despacho que la caución no podía ser exigida previo admitirse la demanda, porque dicha exigencia no comporta una causal de inadmisión de las enlistadas en el canon 90 del C.G.P, y si en gracia de discusión se admitiera dentro de la causal prevista en el numeral 7 de la norma en cita, al rogar el decreto de una medida cautelar el requisito de procedibilidad no resulta exigible. Apreciación que también advierte frente a la exigibilidad de la

caución, porque tampoco se encuentra consagrada en la norma procesal como causal de inadmisión.

3. Del auto impugnado. El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, en providencia del dos (02) de diciembre del año pasado, decidió rechazar la demanda, advirtiendo que si bien el artículo 590 del C.G.P permitió a las partes acudir directamente al juez sin necesidad de agotar el requisito de procedibilidad, ante la solicitud de medidas cautelares, en esa misma disposición normativa se exigió que, para decretar cualquier medida de ese tipo, debía acompañarse la respectiva caución. En el caso en concreto, como no se subsanó la demanda en la forma requerida, porque no se acompañó la caución ni fue aportado el requisito de conciliación prejudicial, dispuso su rechazo.

4. De la alzada. En la oportunidad procesal pertinente el apoderado judicial del demandante interpuso recurso de apelación, reiterando los argumentos descritos en el memorial de subsanación, adicionando que el despacho confunde un requisito para el decreto de la medida cautelar con una de las exigencias consagradas en el artículo 82 del C.G.P, confusión que lo llevó a tomar una decisión de rechazo, misma que no comparte.

III. CONSIDERACIONES

1. Averiguado está que todo proceso judicial inicia por demanda de parte, a menos que la ley dispense de tal escrito, por ejemplo, cuando la actuación pueda promoverse de oficio (artículo 8 C. G. del P.). Dada su capital importancia, entonces, el escrito genitor del proceso no es un documento cualquiera, sino que está revestido de ciertas formalidades impuestas por el legislador (artículos 82 y s.s. C. G. del P.), de riguroso cumplimiento y, en caso de inobservancia, pasan a ser motivo de inadmisión de la demanda (artículo 90 C. G. del P. C).

2. En efecto, el artículo 90 del C. G. del P., establece las causales por las cuales se puede inadmitir o rechazar de plano una demanda, cuando ésta adolece de alguno de los requisitos especificados por el legislador para su presentación. En este sentido, debe verificar que la misma reúna los requisitos y si se advierte la ausencia de alguno de ellos, deberá inadmitirla a efectos de que, en el término de cinco días, la parte actora lo subsane, y habrá lugar a ello

cuando, para lo que atañe a este caso: “...7. No se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad...”

3. El Caso concreto. Argumenta el apelante que carece de sentido que en el auto inadmisorio se fije una caución, porque no es un requisito formal de inadmisión de la demanda, justificación que de entrada advierte esta Corporación no resulta de recibo, porque la exigencia de la caución no se mira de forma aislada, como un simple importe, sino que se analiza de forma integral, como carga adicional para el decreto y práctica de la medida cautelar y así lograr que se configure como eximente de requisito de procedibilidad, a tal punto, que si no se llega a efectuar, no puede dársele continuidad al proceso, por ser un procedimiento que debe intentarse antes de acudir a la especialidad jurisdiccional civil, veamos:

En efecto, los demandantes acuden a la jurisdicción de manera directa, solicitando como medida la inscripción de la demanda sobre el vehículo automotor tractocamión de placas YHK-679 de propiedad de uno de los codemandados –William de Jesús Gañan-, pretendiendo de forma consecencial -voluntariamente o no-, de este modo, **que se le exima del cumplimiento del requisito de procedibilidad**, ante la evidente naturaleza conciliable del asunto propuesto.

Bien puede decirse entonces, que la conciliación extrajudicial como procedibilidad para tocar las puertas de la justicia, no siempre es exigible de manera ineludible, dado que es el propio legislador quien estableció las circunstancias en que este requisito es posible obviarlo, así, el artículo 590 del C. G. del P. *in fine* dispone que: “...En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad...” (Subraya Intencional). La etiología de la anterior norma es clara: si se pretenden medidas cautelares no debe alertarse a la futura contraparte con una conciliación prejudicial, pues sabrá que será demandada y es posible que no conserve -o grave- sus activos.

3.1. Como lo ha estudiado el tratadista Dr. Hernán Fabio López Blanco¹ *“...la medida cautelar en el proceso civil*

busca precaver y prevenir las contingencias que puedan sobrevenir sobre las personas o los bienes, o sobre los medios de prueba mientras se inicia un proceso o se adelanta (...)”, en efecto, fueron creadas para asegurar un adecuado cumplimiento del fallo garantizando a las partes un equilibrio jurídico.

En concordancia con la creación de esta figura jurídica se habla de las cauciones, tomadas como una garantía jurídica para dar cumplimiento a lo que se estableció. Así lo ha dicho la Corte Constitucional²: *“...La caución se define como una obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Su finalidad, como medida cautelar, consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los sujetos procesales durante el proceso, así como garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen.”* La cual para su señalamiento prestación y calificación, como lo resalta López Blanco³, tiene respaldo legal, por lo que para su eficacia debe ser previamente señalada por el juez mediante auto en el cual precisará su cuantía y plazo en que debe constituirse, en caso de que la ley no lo indique.

De igual forma el estatuto general del proceso en su artículo 590 numeral 2° consagra lo siguiente al respecto: *“Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica (...)”*.

3.2. Desde esta perspectiva, para el suscrito Magistrado es claro que razón le asistió a la señora juez al rechazar la demanda, pues el legislador al establecer las medidas cautelares, **a ella le sumó la obligación de la caución, la cual debe prestarse en el término dado por el juez al momento en que la parte interesada la solicita**, porque, de lo contrario, no le es posible al funcionario judicial acceder a su decreto y práctica, ya que no basta únicamente con su solicitud, sino que se hace imprescindible cumplir con dicho requisito

¹ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Procedimiento Civil General, Editorial Dupré, Undécima Edición. Página 1050.

² Corte Constitucional 04 de agosto de 2009. Magistrada Ponente- Dra. María Victoria Calle Correa.

³ LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso Parte General, Dupré Editores, Ltda. 2017. Página 1086

adicional, al tiempo que si decidiera incluso prescindir de las medidas cautelares y admitir sin más la demanda, podría desembocar en una alteración de las reglas para obviar el requisito de procedibilidad, lo que resulta inaceptable.

En verdad, limitar la dispensa del consabido presupuesto previo al hecho que se ruegue una medida cautelar, con independencia de su posterior decreto y práctica, implicaría dejar abierto el camino a que, en este y otros asuntos de estirpe conciliable, el extremo activo de la relación jurídico procesal se baste de la simple solicitud de una cautela para burlar la obligación de intentar previamente la autocomposición de las diferencias que los desune con la parte pasiva.

Por tanto, se estima que la razón está con la señora Jueza directora de la primera instancia, ya que lo que hizo fue darle aplicación a la norma procesal civil, por lo que previamente y para que la justicia civil pueda avocar el conocimiento del asunto, se imponen dos obligaciones claras a la parte demandante, como vienen a ser: agotar el requisito de procedibilidad y, al solicitarse las medidas cautelares, para efectos de su decreto y práctica, requiere prestar caución. Por ello no le era dable al juez de primera instancia, mantener con efectos eximentes la solicitud de medida cautelar no habiéndose prestado la respectiva caución, ni tampoco continuar con el trámite para la admisión de la demanda, toda vez que no se cumplió con el requisito de procedibilidad y mucho menos con la caución que habilitara el decreto de la medida cautelar que permitiera dar continuidad a la admisión de la demanda, tal y como fue anunciado en el escrito inadmisorio.

La exigencia impuesta por la jueza *a quo*, aunado al término concedido para hacerla efectiva, no es caprichosa ni gravosa, sino que tiene hontanar en una seria previsión legal que busca resguardar los derechos de quienes pudieren verse afectados con la medida, de modo que para el decreto de esta no es suficiente su petición, sino que es menester, amén de su procedencia, que se adose la caución judicial que garantice el pago de las costas y perjuicios que aquella llegue a generar, cuestión que, desde luego, no puede depender de la capacidad de pago o de las facultades presupuestales del actor, ya que, es el mismo demandante quien debía tener claro cuáles eran las pretensiones de la

demanda y en qué cuantía ascendían la totalidad de ellas. En parte alguna, entonces, se observa que se encuentre entorpecido el acceso a la administración de justicia y, menos aún, tampoco se avista una formalidad que desborde los ritos procedimentales exigidos para esta clase de procesos.

Así las cosas y al no obrar mérito alguno capaz de modificar la providencia recurrida, se confirmará el auto fechado del dos (02) de diciembre de 2022 proferido por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de esta ciudad, al interior del presente juicio verbal.

De esta manera, y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín***, Sala Unitaria Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

V. RESUELVE:

PRIMERO: **CONFIRMAR** el auto del dos (02) de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medellín, en el trámite de este procedimiento verbal con pretensión declarativa, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de este proveído.

SEGUNDO: Sin condena en costas, toda vez que aún no se ha integrado a *litis*.

TERCERO: En firme esta decisión, y cumplida la ritualidad secretarial de rigor, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado

Firmado Por:
Julian Valencia Castaño
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 010 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1e026c0b2ca6c943503fa20ce435951d543d4b745533525d50557dca3887865a**

Documento generado en 09/06/2023 10:40:12 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>